

IGLESIA Y CONFLICTO SOCIAL: LOS OBISPOS FRENTE AL “COMBO”¹

Fernando Artavia Araya

RESUMEN

El artículo estudia la participación de la Iglesia Católica costarricense ante el proceso de tramitación y aprobación del Proyecto de Ley conocido como “Combo ICE”. Debido a la importancia de la conflictiva coyuntura estudiada, se habla de un ‘antes’ y un ‘después’ del “combo”, poniendo énfasis en el análisis del discurso de la jerarquía episcopal.

PALABRAS CLAVE: IGLESIA CATÓLICA * CONFLICTO SOCIAL * OBISPO * DISCURSOS RELIGIOSOS * ICE

ABSTRACT

This article studies the participation of the Catholic Church of Costa Rica in the process of tramitation and approval of the Law Project known as “Combo ICE”. Due to the importance of that moment, the author speaks of a ‘before’ and an ‘after’ the “combo”, enfasizing in the analysis of the discourse of the episcopal hierarchy.

KEY WORDS: CATHOLIC CHURCH * SOCIAL CONFLICT * BISHOPS * RELIGIOUS DISCOURSE * ICE

Poco más de cuatro años atrás, Costa Rica se vio estremecida por una de las movilizaciones sociales más grandes que ha conocido la historia reciente del país, cuando diversos

grupos y sectores sociales (sindicatos, estudiantes, ambientalistas, organizaciones comunales, trabajadores públicos y privados, representantes de pastoral social, entre otros), salieron a las calles a protestar contra la atropellada tramitación y aprobación en primer debate del *Proyecto de Ley para la modernización y mejoramiento de los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones y de la participación del Estado*, popularmente conocido como “Combo ICE”.

La situación de abierta conflictividad social que vivió el país durante los meses de marzo y abril del 2000, culminó con el retiro del “combo” de la corriente legislativa, y

1 El presente artículo constituye una versión levemente modificada de la *ponencia* presentada en las III Jornadas de Investigación organizadas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, en septiembre del 2004. Quiero agradecer al Dr. Manuel Solís Avendaño la invitación a formar parte del panel de discusión sobre el “Combo” en el marco de dichas jornadas, así como su iniciativa de publicar las ponencias presentadas.

la conformación de una Comisión Especial Mixta que se encargaría de estudiar y hacer propuestas sobre el tema de modernización y fortalecimiento del ICE. Los sectores populares se anotaron así una importante victoria, al forzar al Gobierno y los diputados a echar atrás una tramitación que, días después, fue anulada por la Sala Cuarta, pues presentaba vicios que atentaban contra los sanos principios de la participación y la democracia.

Uno de los aspectos más llamativos de esta coyuntura, fue la participación de la Iglesia Católica costarricense. Los presbíteros, la pastoral social, personas consagradas a la vida religiosa, e incluso algunos colegios católicos, desempeñaron un importante papel en la movilización social contra el “combo energético”, lo cual le valió la simpatía y el reconocimiento de amplios sectores de la ciudadanía². Por su parte, los obispos se pronunciaron en varias oportunidades, tanto individualmente como reunidos en Conferencia Episcopal, respecto al proyecto de ley y la situación de conflictividad social que vivía el país. No obstante, la participación de los obispos se caracterizó más por su división que por la unanimidad que generalmente tiende a atribuírseles.

La privatización de servicios y empresas estatales es uno de los procesos de transformación que comportan una mayor resistencia social y que, eventualmente, puede contribuir a incrementar la inestabilidad política en un país³. En Latinoamérica, donde estos procesos se han visto acompañados por enormes movilizaciones populares, en su mayoría con desenlaces poco alentadores, el papel de la Iglesia ha sido poco estudiado⁴.

El presente artículo expone algunos de los resultados de la tesis de Licenciatura en Sociología “Iglesia y conflicto social: el discurso de los obispos frente al Combo ICE”. En ella se realizó un análisis discursivo a diez textos emitidos por los obispos de la Iglesia Católica costarricense en relación con el “Combo ICE” y la movilización social de protesta.

COSTA RICA ANTES DEL COMBO

Antes de su aprobación en primer debate, la mayoría de los ciudadanos no había tenido acceso a una información transparente sobre el contenido del proyecto de ley⁵, y la mayoría de quienes sí estaban enterados del contenido de tal iniciativa, reclamaban que no se les había permitido participar y ser escuchados por los promotores del “combo”.

Uno de los principales argumentos que exponían quienes se opusieron al “combo”, era que mediante dicho proyecto se intentaba privatizar al ICE, en vez de modernizarlo. La idea de la privatización no era bien recibida, y su sola mención evocaba el fantasma de las experiencias latinoamericanas en ese tema como las negativas consecuencias de “los apagones y racionamientos en Chile y Argentina”. Además, se advertía que la privatización traería “incrementos desmedidos en las tarifas de los servicios eléctricos y telefónicos”⁶.

2 Según un estudio de Unimer-*La Nación*, el 67,5% de los costarricenses aprobó la actuación de la iglesia Católica en relación con el “Combo”. *La Nación* 25/06/2000, p.5A.

3 Ver: Sojo, Carlos. “Reforma económica y cambio estatal en Centroamérica”. En: *Revista Nueva Sociedad* nro. 156; pp.127-142.

4 Según una encuesta latinoamericana realizada entre julio y agosto del 2003 por la organización Latinbarómetro y CID GALLUP: “Cuatro de cada cinco centroamericanos consideran que

los procesos de privatización aplicados en países donde se iniciaron procesos de apertura no les han traído ningún beneficio”. Ese mismo estudio señala que “existe gran desconfianza de parte de los ciudadanos hacia las instituciones, aunque la Iglesia Católica sigue siendo el organismo que goza de mayor credibilidad con 68% de aprobación”. “Centroamericanos descontentos con privatizaciones”, en *Semanario Universidad*, 27/11/2003, p. 5.

5 Así lo demostraba una encuesta de opinión realizada entre el 4 y el 11 de marzo, por el Instituto de Estudios en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional.

6 “Campo pagado del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (SIICE). A todo el pueblo de Costa Rica”, en *La Nación*, 20/02/2000, p. 28A.

Desde muy temprano, los diferentes sectores que se oponían al “combo” sospechaban acerca de los posibles beneficios personales, familiares y políticos, que se hallaban entremezclados en la tramitación del proyecto de ley. Empezaron a hacerse públicos los nombres y apellidos de las personas y familias⁷, cuyas empresas se hallaban directamente relacionadas con los beneficios de la cogeneración privada, permitida por las leyes 7200 y 7508, que obligaban al ICE a comprar energía producida por las empresas cogeneradoras, aunque no la necesitara y a un precio mucho más alto que el del instituto.

Los opositores al proyecto identificaban la “venta del ICE” con una “venta del país”, y el gobierno y los diputados eran considerados “vendepatrias”. Esta identificación sugiere un aspecto fundamental: el ICE constituye un símbolo de lo nacional, de “*lo nuestro*”⁸. Según los datos proporcionados por el estudio de Araya *et al.*⁹, ante la pregunta “¿Defender el ICE es defender la soberanía?”, la mayor parte de los encuestados (67,4%) respondió a favor.

Sin embargo la representación del “combo energético” como una venta del patrimonio nacional, y una traición a la patria, contrasta diametralmente con aquella del gobierno y los sectores que apoyaban dicho proyecto. Por ejemplo, en un campo pagado por el Consejo Consultivo de Comercio Exterior¹⁰, se aplaudía “la valentía y el empeño demostrado” por los diputados y el gobierno. La llamada “modernización del ICE” a través del “combo energético”, era representada

por los sectores político-empresariales como una cuestión de “valentía”, “espíritu patriótico y sentido de la responsabilidad”; mientras, su no aprobación era rebatida como un acto de cobardía ante “un futuro mejor”, “temor al cambio”, irresponsabilidad, y falta de patriotismo. La disyuntiva que enfrentaban los diputados, desde esta óptica, era “escoger entre el estancamiento y la modernización”.

Por su parte, numerosos grupos de ciudadanos e instituciones continuaron expresando su oposición al proyecto de ley. Se empezó a denunciar las presiones de parte de grupos y sectores interesados en la aprobación del proyecto. También, se denunciaba una campaña de desinformación en los medios de comunicación social sobre el ICE, para crear un ambiente favorable a la aprobación del “combo”. Además, se reclamaba la ilegitimidad de dicha tramitación, pues no tomaba en cuenta los efectos y eventuales problemas que significaría la ley para el ambiente y las diferentes comunidades. El gobierno y los partidos políticos tradicionales habían negado la participación a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre un proyecto de ley de interés nacional. Así las cosas, la protesta social no se hizo esperar.

Ahora bien, cuál fue la participación de la jerarquía episcopal de la Iglesia ante la tramitación del controvertido proyecto de ley.

LA IGLESIA FRENTE AL “COMBO”

Desde que se anunció la fusión de los tres anteriores proyectos de ley en el “combo”, monseñor Trejos, obispo de San Isidro de El General, se pronunció públicamente en contra de tal iniciativa en la carta pastoral con que celebraba sus veinticinco años de ministerio pastoral, en enero del 2000. Aunque la celebración y el mensaje de Trejos no gozó de la difusión esperada por parte de la prensa, muchos alabaron su valentía, mientras el gobierno y los promotores del “combo” veían con preocupación y disgusto las declaraciones del obispo.

Monseñor Trejos se reunió personalmente con el presidente Miguel Ángel Rodríguez en la primera semana de febrero, donde le expresó sus puntos de vista y le solicitó a él y a los

7 Entre las principales familias involucradas en la generación privada, destacaban, entre otras, la de Óscar Arias Sánchez, Carlos Vargas Pagán, Miguel Ángel Rodríguez, y José María Figueres Olsen.

8 Incluso, en las fotografías y vídeos de las protestas se puede observar la forma en que los manifestantes marchaban con la bandera de Costa Rica y la del ICE entrecruzadas, mientras cantaban el himno del ICE, el himno nacional y otros cantos patrióticos.

9 Manuel Araya Incera *et al.* *Estado de la opinión pública costarricense. Un análisis de los principales temas de conflicto.* (San José: Editorial CIMPA, 2001).

10 “Sobre la reforma a los sectores de energía y telecomunicaciones”, en *La Nación*, 16/02/2000, p. 23A.

diputados que dieran “a conocer al país todos los detalles del proyecto de ley”¹¹, cosa que no ocurrió. Dos semanas después, Trejos junto a 34 presbíteros de su diócesis, publicaba un comunicado donde lanzaba algunas de las más duras críticas al proyecto del “combo”.

Los representantes de la Iglesia Particular de Limón se solidarizaron con las opiniones del obispo y los sacerdotes de San Isidro. El Consejo Pastoral Diocesano de Limón, encabezado por monseñor Ulloa, e integrado por sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos comprometidos, emitieron una carta al obispo isidreño, donde concordaban con las denuncias que este realizara en su carta pastoral de enero. El Consejo enfatizaba los serios problemas que ambas diócesis tenían en común, como la explotación irracional de los recursos naturales y las amenazas al medio ambiente. También, saludaban el esfuerzo de Trejos por permitir una mayor participación laical, y la “valentía y claridad” con que denunciaba “los abusos y lesiones a los derechos de las personas y las comunidades por parte de empresarios o autoridades de gobierno”. Además, coincidían con Trejos en que en el “lesivo proyecto” del combo estaba “privando el cálculo empresarial”, y que se trataba de un “esfuerzo por vender los activos del Estado”.

El 14 de febrero se realizó un almuerzo en Casa Presidencial, donde el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Román Arrieta, junto a los obispos de Tilarán, de Limón, y el auxiliar de San José, se reunieron para escuchar las exposiciones sobre el “combo” del gobierno y representantes del ICE. Tras la reunión, monseñor Arrieta mostró su complacencia con el proyecto, y afirmó que le quedaba una “visión positiva”.

Haciéndose eco del discurso oficial, mons. Arrieta señalaba que “hay mucha insistencia en deformar parte de la información técnica”¹², y que “en la calle se oyen muchas cosas respecto al tema... que no responden en

absoluto a la verdad”. Además, insistía en que “nadie está vendiendo al ICE, esa es una solemne mentira, de lo que se trata es de modernizar al ICE... para beneficio de todos los costarricenses”. El Arzobispo llamaba a todos los costarricenses para que se abrieran al resto del mundo, y tuvieran una apertura hacia el futuro, pues “no pueden quedarse anclados en el pasado”. Así mismo, declaró a la prensa que la oposición de monseñor Ignacio Trejos —quien no asistió a esa reunión— se derivaba de una “confusión del prelado”.

Las diferencias sobre el “combo” entre el arzobispo Monseñor Román Arrieta y monseñor Ignacio Trejos provocaron roces al interior de la Conferencia Episcopal, que seguía sin pronunciarse en forma conjunta respecto al proyecto de ley. Finalmente, el 2 de marzo, tras haberse reunido con dirigentes sindicales y diputados de la Comisión de Administración y Gobernación, los obispos de la Conferencia Episcopal emitieron un comunicado conjunto donde pedían una mejor información sobre el proyecto, así como seis puntos que debían ser tomados en cuenta antes de la aprobación del “combo”¹³.

Pero, ello no implicaba la disminución de las diferencias entre las posiciones al interior de la Conferencia Episcopal. Monseñor Trejos, en sus declaraciones a la prensa continuaba con su oposición al proyecto, pues seguía considerando que lo que se buscaba era “privatizar el ICE y no modernizarlo”¹⁴. Por ello, Trejos había tenido que soportar “amenazas, varios intentos de comprar su conciencia” y hasta ser denunciado ante la Nunciatura Apostólica como “potencial agitador” y “peligroso obispo ecologista”¹⁵. También tuvo que enfrentar las críticas por parte de los sectores más conservadores de la prensa costarricense, viéndose involucrado en una fuerte polémica con el periódico *La Nación*, al frente de Julio Rodríguez, quien desde su columna de opinión *En Vela* declaró su oposición a la

11 “Obispo Trejos se opone a proyecto. Iglesia dividida por combo ICE”, en *Al Día*, 15/02/2000.

12 “No podemos quedarnos anclados en el pasado”, en *Eco Católico*, 20/02/2000, p. 7.

13 “Obispos exigen claridad”, en *Al Día*, 04/03/2000, p. 10A.

14 “Iglesia exige claridad en combo ICE”, en *La República*, 04/03/2000, p. 6A.

15 “Dios no nos ha abandonado”, en *Eco Católico*, 05/03/2000, pp. 5-8.

participación de la Iglesia Católica en la discusión sobre el “combo”, y objetó directamente las declaraciones de Trejos sobre el mismo.

Pero, qué era lo que decían monseñor Trejos y los restantes obispos respecto a ese proyecto de ley.

DISCURSO DE LOS OBISPOS

Antes de la aprobación del combo en primer debate, se observa gran tensión en la producción discursiva de los obispos de la Iglesia Católica costarricense.

El discurso de monseñor Ignacio Trejos intentó satisfacer en mayor grado con la demanda de los sectores populares que se opusieron al “combo energético”. Esos sectores sociales (trabajadores del ICE, ambientalistas, estudiantes, sindicatos, organizaciones comunales, etc.) pedían una mayor participación en la toma de decisiones, clamaban por transparencia e información, sostenían que el ICE sería privatizado y no modernizado, denunciaban los intereses personales y familiares en el proyecto de ley, se angustiaban por el futuro aumento de las tarifas en los servicios brindados por el ICE, y advertían respecto de los problemas ambientales del “combo”. Todos estos argumentos, y muchos otros más, fueron esgrimidos por monseñor Trejos en su discurso religioso contra el proyecto de ley y sus promotores.

El obispo de San Isidro percibía la tramitación del “combo energético” como una amenaza contra el bien común y los intereses de las mayorías, en la que se vendería el patrimonio nacional, poniéndolo enteramente en manos de los ricos. Trejos hablaba directamente de privatización, y cuestionaba los supuestos beneficios de la llamada “apertura”, la competencia y las leyes del mercado. Advertía sobre los problemas ambientales que provocaría la generación privada en los bosques y reservas naturales, así como el apetito voraz de las grandes transnacionales. Denunciaba la forma poco participativa y antidemocrática en que se tramitó el proyecto, así como los intereses familiares y personales de los promotores del “combo”. Reclamaba a los dueños de los medios de comunicación social por no informar transparente e imparcialmente

sobre el proyecto de ley. Finalmente, llamaba al pueblo a que despertara y asumiera su responsabilidad en la defensa del ICE, de la institucionalidad costarricense, y de *lo nuestro* en general. Ello significaba manifestarse contra el “combo” y, en cierto sentido, desobedecer a los gobernantes que llevaban al país por el camino equivocado, por un “camino no cristiano” y de una “democracia sin valores”.

Por el contrario, el discurso de monseñor Román Arrieta, en términos generales, logró satisfacer en mayor grado la demanda de los grupos y sectores sociales que promovieron el “combo energético”. El gobierno, los diputados mayoritarios, la prensa escrita, y las cámaras empresariales (Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, entre otras), sostenían que el ICE no sería vendido ni privatizado, sino que sería fortalecido y modernizado, lo cual redundaría en beneficios y progreso para el país; clamaban por la apertura y la competencia en el mercado energético y de telecomunicaciones, pues consideraban nocivos los monopolios estatales; denunciaban la supuesta ineficiencia de los servicios brindados por el ICE; y afirmaban que las tarifas no subirían con el “combo”, sino todo lo contrario, con la apertura y la competencia tenderían a abaratarse. Estos argumentos fueron retomados en el discurso de monseñor Arrieta.

Arrieta enfatizó la necesidad de la modernización del ICE, y pidió la colaboración de todos los costarricenses en dicho proceso. En ningún momento cuestionó el carácter privatizador del proyecto de ley. Aceptaba la apertura y la competencia del ICE con empresas nacionales e internacionales. Su única demanda a los promotores del “combo” consistió en pedir tarifas accesibles para los pobres. En fin, se trata de una producción discursiva que siguió la línea del gobierno y demás promotores del proyecto de ley, en tanto sugería lo beneficioso de dicha iniciativa.

Por su parte, el comunicado conjunto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica del 2 de marzo, hacía suya buena parte de las demandas e inquietudes de los sectores populares que se oponían al “combo energético”. Cabe destacar, particularmente, la necesidad de una información transparente; mayor participación de los

ciudadanos en la toma de decisiones; aclarar por qué no se trataba de privatización ni venta de activos nacionales; evitar la explotación irracional de los recursos naturales; dejar claros los requisitos sobre eventuales concesiones de agua y generadoras de electricidad; evitar el alza en las tarifas; no perder de vista la dimensión social del ICE; y buscar el bien común de todos los costarricenses. Desdichadamente, el mensaje de los obispos no tuvo eco en la Asamblea Legislativa, y el proyecto del “combo” fue aprobado en primer debate, con toda la celeridad, falta de transparencia y participación que caracterizaron su viciada tramitación.

COSTA RICA DESPUÉS DEL COMBO

Ignorando la oposición de amplios sectores y grupos sociales, y haciendo caso omiso a las demandas de una mayor información y participación de los ciudadanos, el *Proyecto de Ley para el mejoramiento de los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones y de la participación del Estado*, fue aprobado en primer debate el 20 de marzo a las 9:47pm, con 45 votos a favor y 10 en contra¹⁶, en un recinto legislativo sitiado por una multitud de manifestantes, y resguardado por centenares de policías armados con bombas lacrimógenas y equipos antimotines. Desde ese momento la situación empezó a tomar otro cariz. El aumento de la conflictividad entre quienes apoyaban y quienes se oponían al “combo energético”, caracteriza entonces este segundo momento de nuestro análisis.

Uno de los factores que puede explicar la forma en que se llevaron a cabo las protestas sociales, puede encontrarse en la falta de apertura al diálogo y la escucha por parte del gobierno y los impulsores del proyecto de ley. Cuando se niega a los ciudadanos la información transparente y la participación en las decisiones sobre asuntos que les conciernen y afectan sus vidas, entonces se genera una sensación de malestar y disgusto que busca expresarse

por otros medios¹⁷. Así, si se restringe el acceso a las barras legislativas, entonces se burla la seguridad y se entra a ellas sin autorización; si los medios de comunicación social mantienen una campaña de desinformación y no permiten a otros actores sociales expresar opiniones distintas al discurso oficial, entonces, los altavoces, los volantes, los *graffiti* y las pancartas, parecen cumplir esa función; si los canales de diálogo y negociación se encuentran bloqueados, entonces las carreteras son bloqueadas como medio de presión para que el gobierno se abra al diálogo.

La conflictividad social que se puso de manifiesto con la tramitación y aprobación del “combo energético” en primer debate, no solo respondía al rechazo de una ley particular, o a la defensa de una institución apreciada por los costarricenses. Tenía raíces más profundas, las cuales fueron ignoradas y subestimadas por el gobierno, cuando no reprimidas del todo. Ese manejo inadecuado de la situación¹⁸, crispó aún más los ánimos, ayudando al desborde del malestar acumulado.

Sin embargo, la tesis dominante que se usó para explicar la movilización nacional de protesta fue la desinformación y la manipulación, a la cual se agregaba un componente fundamental: “que más de la mitad de los participantes eran estudiantes de secundaria”¹⁹. En Casa Presidencial, Miguel Ángel Rodríguez pedía que los estudiantes no fueran usados como “carne de cañón”, y minutos antes de rezar un *Padre Nuestro*²⁰, junto al ministro de

16 Dos de los diputados estuvieron ausentes durante la aprobación.

17 Según una encuesta realizada por IDESPPO, entre el 29 y el 31 de marzo, la mayoría de los consultados (53,3%) consideraba que las manifestaciones contra el “combo” constituían “la expresión popular” a la cual tenían derecho.

18 Según la encuesta realizada por IDESPPO, entre el 29 y 31 de marzo del 2000, la gran mayoría de los encuestados (73%) consideraba que el manejo de la situación por parte del Gobierno había sido inapropiado, y el 20 % consideraba que había sido regular.

19 “Millares desfilan en marcha”, en *La Nación*, 24/03/2000.

20 Véase al respecto el artículo de Amando Robles: “Dos padrenuestros, ¿algún dios?”, en *Eco Católico*, 08/07/2000, p.18.

Seguridad, Rogelio Ramos, y los escuadrones antimotines de la Fuerza Pública, advirtió con tono solemne:

Hoy tenemos una marcha y quiera Dios que no tengamos que usar la fuerza, porque ahí hay buenos costarricenses, equivocados, engañados pero buenos costarricenses...²¹.

Algunos grupos y sectores que apoyaban abiertamente el “combo”, consideraban que la verdadera amenaza a la institucionalidad costarricense, así como la desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política, provenía de una falta de autoridad del gobierno, la cual podría eventualmente provocar la tan temida ingobernabilidad. La amenaza era ubicada en, al menos, dos niveles. Por un lado, existían grupos de presión dispuestos a quebrantar el orden jurídico e institucional, y crear un estado de caos y anarquía. Pero, por otro lado, el gobierno, que debería ser el guardián del orden, reaccionaba débilmente y sin autoridad ante las presiones de esos grupos. Se reclamaba del gobierno mayor claridad en el orden ideológico, y más autoridad y firmeza a la hora de imponer las medidas adoptadas.

Los promotores del “combo” continuaron apelando a unas vías institucionales que habían demostrado su ineficacia con anterioridad. Se invocaban virtudes y valores costarricenses, hasta el momento no demostrados por el gobierno y los diputados: la escucha y el diálogo. Finalmente, se pedía calma y cordura a los manifestantes, pues se temía un estado de ingobernabilidad, donde se correría el riesgo de perder la estabilidad social y política del país. Todo ello se hacía acompañar de la representación de una suerte de *naturaleza tica*, según la cual, los costarricenses poseerían ciertos rasgos distintivos que los diferenciarían de los ciudadanos de otras naciones, sobre todo centroamericanas. Esa particular forma de ser costarricense tendría su anclaje en la historia nacional, y, en ese sentido, la excepcionalidad histórica

complementaría la estructura simbólica que sostiene el discurso dominante sobre el estado nacional. Un discurso que llama a la mesura, que apela a la conciencia cívica, que pide buscar el justo medio evitando los excesos y los extremos, que llama a la calma y el diálogo, que insiste en no violentar la institucionalidad, cuando precisamente la Sala Cuarta declaraba que eran los diputados y el gobierno quienes habían violentado el orden constitucional. En fin, este discurso fue utilizado por la clase político-empresarial, como una de sus principales armas ideológicas en la lucha simbólica contra los opositores al “combo”.

En todo caso, llama la atención que quienes apelaban a un pasado mítico, donde solo tendrían cabida los mejores valores y virtudes costarricenses, no eran únicamente los promotores del “combo”. También, los diferentes sectores sociales que se opusieron al proyecto de ley, se sentían identificados con el discurso de una democracia costarricense no conflictiva y con una tradición pacifista de que hablaba el discurso oficial. El conflicto era visto como algo ajeno a nuestra singularidad histórica, como algo novedoso.

Desde este punto de vista, también cabía la amenaza de que la “excepcional” historia costarricense se viese manchada en algún momento por el derrame de sangre y lágrimas. La diferencia fundamental estriba en que los manifestantes no veían surgir la amenaza de las protestas y el cierre de vías públicas, sino de la falta de escucha y el cierre de las vías institucionales que habían propiciado el gobierno y los diputados. La principal amenaza no la situaban en un gobierno con poca autoridad para imponer sus decisiones; todo lo contrario, era un gobierno con rasgos autoritarios y poco democráticos, el que percibían como amenazante para la paz social y la estabilidad política. Tampoco los sindicatos o los denominados *grupos de presión* eran considerados peligrosos agitadores con sed de poder; más bien, eran estos grupos los que estaban denunciando la insaciable hambre depredadora de los políticos tradicionales que, de no ser detenidos, acabarían con el resto del patrimonio estatal costarricense.

Desde un imaginario sociohistórico compartido, ambas partes realizaban lecturas

21 “Gobierno vivió un día tenso”, en *La Nación*, 24/03/2000.

diametralmente opuestas sobre la situación vivida. En lo que sí parecían coincidir, era que esa situación de conflictividad social no podía mantenerse indefinidamente sin poner en riesgo la estabilidad política del país. Ambas partes deberían sentarse a negociar, y así lo hicieron finalmente el 4 de abril, cuando se acordó el retiro del proyecto de la corriente legislativa, y la creación de una Comisión Especial Mixta que se encargaría durante al menos 150 días de atender, sistematizar e introducir propuestas al “combo ICE”.

IGLESIA Y “COMBO”

Desde la aprobación en primer debate del “combo”, los obispos empezaron a pronunciarse en forma independiente sobre la necesidad de reformar el proyecto y permitir la participación de los sectores sociales en su discusión y mejoramiento. Cada uno por su parte, llamaba a que el gobierno se abriera al diálogo, y los ciudadanos se manifestaran pero sin acudir a la violencia. Así lo hicieron, primero monseñor Ignacio Trejos, quien desde Galilea mostró su agrado por las manifestaciones populares; también monseñor Ángel Sancasimiro, monseñor José Francisco Ulloa, y monseñor José Rafael Barquero. Esos mensajes fueron enviados a la prensa escrita, pero no circularon, como sí lo hicieron en varios campos pagados por la Presidencia de la República las palabras de monseñor Arrieta, “quien arrogándose la representación de la Conferencia Episcopal en pleno se pronunció en contra de las protestas ciudadanas en un tono muy cercano a la voz del gobierno”²².

Debido a la agudización de la lucha contra el proyecto del “combo energético”, monseñor Román Arrieta (Arzobispo de San José, Presidente de la CECOR y obispo encargado de la Comisión de Pastoral Social en aquel momento) ordenó a la Oficina Nacional de Pastoral Social no emitir ningún boletín de prensa más referente al “combo”. Esto, al quitarle autoridad a la Oficina Nacional, dio como resultado que las oficinas de pastoral social de las diferentes

diócesis emitieran comunicados de prensa por separado, lo cual se tradujo en un efecto multiplicador de consecuencias inesperadas para Arrieta, pues en vez de haber un solo comunicado empezaron a salir cinco o seis. Las oficinas diocesanas emitían diferentes comunicados y reportaban lo que estaba sucediendo en sus respectivas diócesis, menos la pastoral social de San José a petición de Arrieta, quien así lo había solicitado en una reunión de clérigos.

Monseñor Trejos había sido enviado a acompañar al Papa Juan Pablo II en una gira por Israel y Palestina, mientras monseñor Román Arrieta, quien en principio sería el que viajaría, permaneció en el país durante toda la conflictiva coyuntura del “combo”. Todo ello era considerado por algunos sectores sociales y eclesiales, como parte de una estrategia que pretendía desligar a Trejos de la movilización social de protesta.

La Pastoral Social de San Isidro de El General, continuaba llamando a los ciudadanos de esa diócesis a ejercer su derecho a manifestarse sin uso de la violencia, y a la policía a no reprimir a los manifestantes, pues en días anteriores se habían presentado enfrentamientos, donde cinco jóvenes de Pérez Zeledón resultaron heridos de bala²³. Por su parte, la Pastoral Social de Limón, denunció la actitud provocadora y la represión de la policía a un grupo de ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en el puente sobre el Río Pacuare²⁴. Mientras tanto, en otras oficinas diocesanas de pastoral social, se llevaban a cabo acciones de solidaridad y concienciación con los fieles sobre los alcances del proyecto de ley, y se propiciaba la discusión en centros educativos, institutos religiosos y comunidades.

No obstante, monseñor Román Arrieta en sus declaraciones a la prensa manifestaba su preocupación respecto al “clima de agresividad exacerbante”²⁵, a raíz de la aprobación en primer debate del proyecto de ley que solía

22 William Vargas. “La voz del pueblo es la voz de Dios”. *Conferencia* ante el Foro Emaús. (s.f.)

23 “Obispos piden cambiar proyecto”, en *Semanario Universidad*, 29/03/2000 al 04/04/2000, p. 10.

24 “Pastoral social de Limón hace denuncias”, en *Eco Católico*, 02/04/2000, p. 17.

25 “Llama a la cordura y a la reflexión serena. Monseñor Arrieta pide no utilizar violencia”, en *Diario La Extra*, 23/03/2000, p. 9.

llamar “de modernización del ICE”. Explicaba la situación de conflictividad, que calificaba de “actitud deplorable”, como consecuencia de la “desinformación y algunas manifestaciones mentirosas”. Por ello, pedía no recurrir a la mentira, el insulto y la violencia.

A las declaraciones de Monseñor Arrieta, se unía la voz del ahora célebre padre Minor Calvo, quien en todo momento repudió los bloqueos y protestas, sirviéndose de su espacio en los medios de comunicación. Desde Radio María, llamaba a los fieles católicos a no participar en las manifestaciones contra el “combo”, hablando *en nombre de la Iglesia*. Con base en las declaraciones del padre Minor y del arzobispo Monseñor Arrieta, Telenoticias anunciaba que la Iglesia Católica descalificaba las movilizaciones de protesta.

Sin embargo, *Radio Sinaí*, reportó esa misma tarde que monseñor Trejos, había reiterado su apoyo al movimiento en contra del combo. También, otras autoridades de la Diócesis de San Isidro señalaron que las declaraciones de Minor Calvo y Román Arrieta no eran representativas de la Conferencia Episcopal, ni mucho menos de la Iglesia Católica costarricense.

DISCURSO DE LOS OBISPOS

El discurso religioso de los obispos durante este segundo momento, después de la aprobación del combo en primer debate, está dirigido a satisfacer en mayor grado las demandas de los sectores populares que se opusieron al “combo energético”. Esto, porque todos ellos, excepto el “*Llamado a la calma*”, insistieron en la búsqueda del bien común, pidieron más tiempo antes de la aprobación definitiva del proyecto, instaron a las autoridades a que brindaran mayor información y permitieran la participación de los diversos grupos y sectores sociales, defendieron la rectitud del movimiento de protesta, lamentaron la aprobación del “combo” en primer debate, protegieron el derecho de los ciudadanos a defender las instituciones nacionales, e instaron a continuar con las manifestaciones de protesta de forma pacífica.

Por el contrario, el “*Llamado a la calma*” insistió en que el ICE no estaba en venta ni

sería privatizado; expresaba una visión negativa de la situación nacional de protesta; exhortaba al regreso de los manifestantes a sus hogares, trabajos y estudios, lo cual produciría una desarticulación y desmovilización de los sectores que se oponían al “combo”; en vez de enfatizar en la necesidad de mayor participación, abogó por la delegación en la toma de las decisiones importantes en los diputados, el Gobierno, los ejecutivos del ICE, y la Sala Cuarta; insistía en el desconocimiento y la manipulación respecto al contenido del proyecto de ley; y alarmaba sobre el peligro que corría la estabilidad política y la paz social del país. Este mensaje, emitido en nombre de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, fue suscrito únicamente por monseñor Román Arrieta y monseñor Antonio Troyo, presidente y secretario de dicho organismo respectivamente, quienes durante todo el período de análisis mostraron una posición proclive al Gobierno y los promotores del “combo”, incluso obstaculizando la participación de la pastoral social y el bajo clero de la arquidiócesis de San José en las manifestaciones de protesta y otras acciones de presión contra la aprobación del proyecto de ley.

Esta diferencia de posiciones entre el episcopado costarricense impidió una producción discursiva unánime, y permitió el surgimiento de claros excesos en el poder de representación de la institución eclesiástica nacional. Frente a una situación de conflictividad social de dimensiones nacionales, que demandaba un tratamiento colegial por parte del episcopado, los obispos se pronunciaron de forma independiente en sus respectivas iglesias particulares, manteniendo un discurso bastante similar en lo fundamental, pero que chocaba de frente con el discurso del presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal.

El bajo clero y las oficinas diocesanas de Pastoral Social desempeñaron un importante papel en las manifestaciones contra el proyecto de ley. Nuevamente fueron estos actores religiosos quienes, al encontrarse directamente en contacto con la problemática de los fieles, lograron transportar al interior del campo religioso sus demandas. Esto les valió el reconocimiento de sus propios obispos y de amplios sectores de la ciudadanía, y les permitió representar a la Iglesia ante la Comisión Especial Mixta.

Cabe destacar el hecho inédito de que en una comisión de tanta relevancia como la que estudió el tema del fortalecimiento del ICE, hayan actuado en representación de la Iglesia costarricense dos agentes de pastoral social. Aunque la Comisión Mixta, en la modalidad en que fue constituida, es ya de por sí algo novedoso, generalmente, se tiende a buscar la representación de una figura con mucho mayor *poder religioso* dentro de la institución eclesial, como puede ser el arzobispo, algún obispo de la Conferencia Episcopal, o incluso un miembro del bajo clero con la formación necesaria para asumir dicha responsabilidad. No obstante, así como la Comisión Mixta permitió una mayor participación por parte de sectores sociales que hasta ese momento habían sido relegados a jugar un papel periférico en la toma de decisiones, también permitió la participación de sectores eclesiales que, generalmente, han jugado un papel secundario en cuanto a la representación institucional.

El trabajo de William Vargas y Pilar Ureña, le valió un gran reconocimiento a la Pastoral Social y a la Iglesia costarricense en general. Según una encuesta de Unimer²⁶, aunque el 49% de los ciudadanos decía no sentirse representado por ninguno de los integrantes de la Comisión, del 43% que sí se sentía representado, la mayoría (27,4%) se sentía representado por la Iglesia. Es decir, los agentes de pastoral social que representaban a la Iglesia dentro de la Comisión, constituía el primer grupo con quien las personas se identificaban, casi triplicando el puntaje obtenido por los diputados (9,8%).

Luego de la experiencia del “combo energético”, también se produjeron llamativos cambios al interior de la Conferencia Episcopal. Monseñor Román Arrieta, quien durante más de treinta años consecutivos había sido el presidente de la CECOR, fue sustituido en su cargo por monseñor José Francisco Ulloa, quien jugó un importante papel en el Consejo de Notables que posibilitó la apertura al diálogo entre los sectores en conflicto. Así mismo, la Comisión Nacional de Pastoral Social, que estaba a cargo

de monseñor Arrieta, quedó bajo la responsabilidad del obispo de Ciudad Quesada, monseñor Ángel Sancasimiro, quien apoyó y fomentó la participación del bajo clero y la pastoral social diocesana en sus manifestaciones contra el “combo”.

Vale la pena recapitular algunas de las principales ideas aquí expuestas, y cerrar con algunas reflexiones sobre la participación de la Iglesia en coyunturas de conflicto social abierto, como la del “combo”.

REFLEXIONES FINALES

✧ La situación de abierta conflictividad social que se generó en torno al proceso de tramitación y aprobación del “combo energético”, logró captar la atención y participación de la jerarquía episcopal costarricense, quien aumentó notablemente su normal producción religiosa de tipo discursivo en cuanto a tópicos de problemática social refiere. Este comportamiento del episcopado puede ser explicado, en parte, en términos de las características del conflicto social mismo, sobre el cual cabe destacar, al menos, los tres rasgos siguientes:

- a) *Se trató de un conflicto multisectorial.* En efecto, la oposición al “combo” logró movilizar a muy diversos grupos y sectores sociales, como los sindicatos, ambientalistas, estudiantes, organizaciones comunales, amas de casa, trabajadores públicos y privados, entre otros. A pesar de esa diversidad, se produjeron importantes alianzas para luchar contra el proyecto de ley, promovido principalmente por el gobierno, los diputados de los partidos políticos mayoritarios, las cámaras empresariales, y algunos medios de comunicación.
- b) *La extensión del conflicto alcanzó dimensiones nacionales.* La movilización contra el “combo” no se

26 “Encuesta de Unimer. ‘Combo’ detonó la frustración”, en *La Nación*, 25/06/2000, pp. 4 y 5A.

limitó al área metropolitana, y ni siquiera a las zonas urbanas; las manifestaciones, paros laborales, bloqueos, y otras formas de protesta, fueron reportadas desde los más remotos confines del país. El descontento popular se extendió a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, incluidas las zonas rurales, las áreas urbano marginales, los puertos y las zonas costeras. Un alto porcentaje de la población apoyó las protestas.

- c) *El conflicto tuvo una duración considerable.* El tiempo es un factor clave en cualquier conflicto social, y en el caso de la coyuntura analizada, se puede decir que la persistencia jugó un importante papel a favor de los opositores al “combo”. La movilización contra el proyecto de ley se prolongó durante varias semanas, en las que, tomando en cuenta la extensión nacional y el carácter multisectorial reseñado en los puntos anteriores, se puso en vilo la “paz social” y la estabilidad política del país.

- ✧ La movilización social de marzo y abril del 2000 no respondió únicamente a la oposición de los ciudadanos al proyecto del “combo energético”, sino que involucró una suerte de *proceso social catártico*, donde amplios sectores de la sociedad costarricense tuvieron la oportunidad de expresar su malestar ante las experiencias de depredación del patrimonio colectivo por parte de la clase política tradicional durante las últimas décadas. Ese malestar acumulado se expresó por canales no institucionales (bloqueos, marchas, graffitis, huelgas de hambre, etc.), en vista de la obturación en las principales vías de comunicación de los ciudadanos con sus representantes políticos.
- ✧ La producción discursiva de los obispos mostró una ruptura o tensión fundamental

entre dos discursos diferentes respecto al “combo energético” y la situación de conflictividad social vivida por el país. Por un lado, se encuentra un discurso religioso que denuncia la naturaleza privatizadora y poco comunitaria del proyecto de ley, la forma antidemocrática y poco participativa en que fue tramitado, y apoya las manifestaciones de protesta contra su aprobación en primer debate. Este es el discurso de monseñor Ignacio Trejos antes y después de la aprobación en primer debate del proyecto, y el de monseñor Ángel Sancasimiro, monseñor José Rafael Barquero, y monseñor José Francisco Ulloa, después de la misma. Por otro lado, se presenta un discurso que niega el carácter privatizador del proyecto, enfatiza en la modernización del ICE, la apertura y la competencia, y objeta la situación nacional de protesta, llamando a los manifestantes a volver a sus hogares, trabajos y estudios. Este discurso es suscrito por monseñor Román Arrieta y monseñor Antonio Troyo. Ambos discursos, aunque con algunos puntos de encuentro durante el segundo subperíodo analizado, presentan estructuras simbólicas bastante diferentes, y están orientados a satisfacer las asimétricas y contradictorias demandas de ambos lados del conflicto.

- ✧ La lucha contra el “combo energético” movilizó una fuerte identificación colectiva con lo nacional, lo nuestro, lo propio, el patrimonio y la tradición. El ICE constituye un símbolo de arraigo nacional, representa un pasado de luchas nacionalistas por solucionar el problema de la electricidad y las telecomunicaciones, y constituye una empresa clave en el modelo de desarrollo promovido por el Estado de Bienestar durante la segunda mitad del siglo XX. Todo ello ha dejado huella en la memoria colectiva. Monseñor Ignacio Trejos se sirvió, precisamente, de una estructura discursiva que enfatizaba en la importancia de lo nuestro, lo comunitario, lo colectivo, el

patrimonio, los valores nacionales, la institucionalidad costarricense, y la patria, *versus* el espacio externo, la globalización neoliberal, las transnacionales, los organismos financieros internacionales, y la apertura. Fue este carácter nacionalista del discurso de monseñor Trejos, aunado a una compleja estructura simbólico-religiosa, la que le permitió al obispo de San Isidro condenar como anticristiano el proyecto del “combo”, y criticar la forma en que los políticos han gobernado el país durante las últimas décadas.

- ✧ El papel protagónico y pionero de monseñor Ignacio Trejos en la lucha contra el “combo energético”, no puede ser explicado sociológicamente apelando de forma exclusiva a la buena voluntad o a factores psicológico-individuales, como el carácter o la personalidad de este obispo. La diócesis de San Isidro de El General, ubicada en la zona sur del país, caracterizada por la pobreza, el desempleo, la migración, y otros problemas socioeconómicos, también ha sido una de las más afectadas por la generación privada de electricidad. El Proyecto Hidroeléctrico Los Gemelos, de la empresa tico-española Antheus, provocó el desalojo de más de cincuenta familias de Pérez Zeledón, y preveía un enorme impacto ambiental en la zona. El bajo clero y la Pastoral Social de esa diócesis, quienes mantienen un contacto directo con los fieles y la problemática de la zona, transportaron las demandas de los laicos al interior del campo religioso, específicamente al seno de la Iglesia Católica, donde monseñor Ignacio Trejos se identificó cabalmente con dichas demandas, participando de forma activa en la lucha contra la generación privada de electricidad en su diócesis, mucho tiempo antes de que siquiera empezara el conflicto por el “combo”.
- ✧ El bajo clero y los agentes diocesanos de pastoral social desempeñaron entonces un papel fundamental *antes, durante,* y
- después* de la movilización social contra el “combo ICE”. Ello les valió el reconocimiento de un amplio sector de la sociedad costarricense, y la oportunidad de representar a la Iglesia dentro de la Comisión Especial Mixta. En este sentido, como señalan Pierre Bourdieu y Otto Maduro, una categoría de clérigos y agentes con poco *poder religioso* se pueden ver beneficiados al identificarse con las demandas de los sectores sociales dominados, y transmitirlos al interior del campo religioso de una sociedad.
- ✧ El discurso de los obispos, especialmente después de la aprobación en primer debate del “combo”, acude también a la representación de la excepcionalidad histórica y la naturaleza no violenta del costarricense. Esta representación colectiva tan arraigada en el imaginario nacional, es particularmente explotada durante los períodos de abierta conflictividad social, y le permite a los obispos trazar los límites entre lo lícito y lo ilícito en cuanto al derecho de manifestarse contra determinadas políticas que afectan a las mayorías. El comportamiento violento no aparece en ningún momento formando parte del pasado de Costa Rica. Los actos de violencia y represión son presentados como desdichadas novedades en ese proceso lineal y sin mayores sobresaltos que constituye nuestra “pacífica y democrática historia”.
- ✧ La Iglesia Católica es una institución que, en la medida de lo posible, evita cualquier tipo de conflicto en su interior, sobre todo cuando este amenaza presentarse entre las altas capas clericales. Por ello, durante coyunturas de abierta conflictividad social, y donde la posición de la alta jerarquía eclesiástica se encuentra dividida, como en el caso del “combo energético”, se intenta disimular tales tensiones y rupturas, queriendo aparecer públicamente como una institución monolítica, sin fisuras, compacta e indivisa. No obstante, el conflicto es un proceso normal en toda

institución humana, y representa una de las principales vías de cambio y adaptación institucional ante las transformaciones del contexto social. En este sentido, la Iglesia debe aprender a afrontar debidamente las situaciones de conflicto y la existencia de diferencias en su seno, pues es precisamente esto lo que posibilita el surgimiento de lo nuevo y dinamiza la permanente capacidad de creación.

- ❖ Finalmente, se debe aclarar que la ruptura o tensión en la producción discursiva del episcopado respecto al "combo energético", no implica necesariamente la existencia de dos diferentes *modelos u opciones eclesiales*. La falta de consenso respecto a determinados temas, o la existencia de tensiones en el seno de la Iglesia durante determinadas coyunturas, no deben ser confundidas con la existencia de modelos eclesiales antagónicos; simplemente, confirman el hecho de que la Iglesia no es una institución monolítica. La estrategia eclesiástica de conservación y ampliación del poder religioso, lleva a la jerarquía a diversificar su producción religiosa en orden a satisfacer parcial y provisionalmente las demandas asimétricas y opuestas de los sectores sociales en conflicto, intentando siempre mantener un tenso equilibrio. Esto es lo que algunos autores como Otto Maduro llaman "producción transaccional". En el pasado, algunos estudiosos han tendido a observar polarizaciones y dicotomías en el comportamiento de la Iglesia Católica costarricense. En esta investigación, se ha evidenciado la posición de apoyo de un sector del clero en la más importante lucha popular de los últimos años; sin embargo, ello no significa de ninguna manera el surgimiento de un "modelo eclesial popular". Esa categoría eclesiológica comprende, entre otras cosas, una forma totalmente distinta de ser iglesia, y una concepción liberadora de la religión, que aquí no hemos hallado.

BIBLIOGRAFÍA

- Acebedo, Bertilda *et al.* *Cuento mi experiencia en la lucha por el ICE*. Editorial de la Universidad Nacional, Heredia. 2002.
- Araya Incera, Manuel *et al.* *Estado de la opinión pública costarricense. Un análisis de los principales temas de conflicto*. Editorial CIMPA, San José, 2001.
- Bourdieu, Pierre. "Génesis y estructura del campo religioso". Traducción libre por el Dr. Amando Robles Robles del artículo en francés: "Genèse et structure du champ religieux". En: *Revue française de sociologie*. avril/juin, 1971. 72 pp.
- Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional. "Encuesta de opinión de los ciudadanos del Gran Área Metropolitana sobre el Combo ICE". Realizada entre el 29 y el 31 de marzo del 2000.
- Instituto de Investigaciones Sociales e Instituto de Investigaciones Psicológicas. "La opinión pública costarricense sobre el "Combo del ICE". Encuesta telefónica a un nivel nacional realizada el 24 y 25 de marzo" (*primer informe*). Universidad de Costa Rica, San José. 2000.
- Maduro, Otto. "Religión y conflicto social". Centro de Reflexión Teológica, México, s.f.
- Mardones, José María. *Neoliberalismo y religión*. Editorial Verbo Divino, Navarra, 1998.
- Pochet, Rosa María (compiladora). *Discurso y análisis social. Métodos cualitativos y técnicas de análisis*. Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, 2000.
- Robles Robles, Amando. "Análisis de comunicados y pronunciamientos de instancias eclesiales en torno a la situación creada por la aprobación del Proyecto 'Combo del ICE' ". *Memoria* de un foro de discusión en

- torno al “Combo del ICE”, auspiciado por la Universidad Católica Anselmo Llorente. Sin publicar.
- Solera Mata, Eric. “La tensión unidad/diversidad como eje constitutivo básico del fenómeno religioso eclesial”. En: “Religión, sociedad, crisis”. *Cuaderno de Ciencias Sociales* de la FLACSO, número 122, San José, 2001. Pp. 7-40.
- Sojo, Carlos. “Reforma económica y cambio estatal en Centroamérica”. En: *Revista Nueva Sociedad*, nro. 156, pp. 127-142.
- Solís, Manuel A. “Entre el cambio y la tradición: El fracaso de la privatización de la energía y las telecomunicaciones en Costa Rica”. En: *Revista de Ciencias Sociales*, número 95; pp. 33-47. Universidad de Costa Rica, 2002.
- Solís, Manuel y González, Alfonso. *Entre el desarraigo y el despojo. Costa Rica en el fin de siglo*. Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, 2001.
- Vargas, William. “La voz del pueblo es la voz de Dios”. *Conferencia* ante el Foro Emaús. (s.f.)

Fernando Artavia Araya
sociofer@hotmail.com